



Revista de Estudios Sociales

2 | 1998
Guerra y Paz

El Estado y la Sociedad

Leopoldo Peralta y Mauricio Vasco



Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/31045>
ISSN: 1900-5180

Editor

Universidad de los Andes

Edición impresa

Fecha de publicación: 1 diciembre 1998
Paginación: 80-86
ISSN: 0123-885X

Referencia electrónica

Leopoldo Peralta y Mauricio Vasco, « El Estado y la Sociedad », *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 2 | 1998, Publicado el 08 marzo 2019, consultado el 06 mayo 2019. URL : <http://journals.openedition.org/revestudsoc/31045>



Los contenidos de la *Revista de Estudios Sociales* están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Presentación

El propósito de este documento es el de contribuir al análisis de los problemas estructurales que afectan a la nación colombiana y proponer lineamientos que orienten soluciones de fondo.

Se han registrado en los últimos años y especialmente en la coyuntura actual, polémicas basadas en ideologismos relativos a los eventuales modelos de desarrollo económico y de organización del Estado que le convendrían a Colombia. Estas polémicas ocultan la real situación de la economía política, y conducen hacia acciones que no harán más que posponer transformaciones profundas y prolongar las condiciones que generan la dinámica de violencia social y de confrontación política armada.

La Constitución de 1991 es un ejemplo de la forma como el establecimiento colombiano ha soslayado los cambios. Las verdaderas reformas que requería el país fueron sustituidas por modificaciones accesorias y formales del sistema político, sin que se tocara nunca el problema de fondo de la distribución del poder y su interrelación con la estructura económica.

Frente a ello, se presenta en este documento una perspectiva basada en un marco de análisis que aísla e identifica los factores y actores del poder actual en Colombia, así como su interrelación y comportamiento, y permite, además, establecer el escenario de ajuste político requerido para modificar, de una manera democrática y constructiva, las condiciones de desarrollo del país.

1. El Estado y la sociedad

El desarrollo político de una nación se alcanza a través de la construcción de un Estado en el cual el conjunto de sus instituciones operan en beneficio del interés general. El escenario de la democracia permite que esta operación se efectúe contando con la voz mayoritaria de los ciudadanos y con la opinión que ellos tienen acerca de los problemas y asuntos prioritarios por atender.

Se registra con persistente frecuencia una tendencia a la distorsión del escenario democrático por la corrupción de las instituciones públicas mediante

mecanismos que las ponen al servicio de intereses privados y sectoriales. Cuando ello ocurre, y sobre todo cuando ocurre de manera excesiva, la democracia se desvirtúa absolutamente. En estas condiciones, se transforma en una fachada para legitimar prácticas generalizadas de corrupción.

Esto sucede en condiciones de un muy precario desarrollo político de una nación, y tiene la perversidad de constituir un escenario que se retroalimenta y agrava hasta cuando un verdadero mecanismo de ruptura radical rompe el círculo vicioso de su reproducción.

Por otra parte, la capacidad de interacción a nivel internacional y, en última instancia, la soberanía de una nación, dependen de la existencia de instituciones legítimas, dentro de las cuales se garantice la sucesión de gobiernos legítimos, la existencia de instituciones parlamentarias respetables y la continuidad de una justicia operante.

Las carencias o distorsiones en uno o varios de estos aspectos generan una situación de debilidad - que puede llegar a ser extrema-, en la cual la soberanía se ve profundamente afectada por las presiones externas o por la incapacidad de ejercer una interlocución adecuada con los otros actores del sistema internacional.

De acuerdo con lo anterior, el aprovechamiento de los recursos naturales, la creación de ventajas comparativas en los mercados internacionales, la distribución de la riqueza, -concebida esta distribución como igualdad en las oportunidades de educación, de salud, de empleo, de bienestar-, la interacción internacional y en general, la movilización de una sociedad a través de sus instituciones en la búsqueda del beneficio general, tienen como requisito el desarrollo político, entendido éste como el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, liberadas de los nocivos mecanismos de corrupción antes descritos.

2. La situación colombiana

El Estado como relación social refleja la distribución del poder económico y político. En todos los estados se refleja la influencia de los diferentes sectores sociales y grupos de interés, frente a los cuales el Estado debe ejercer un adecuado arbitraje, basado en la búsqueda del interés general.

En Colombia, la guerra interna se produce como resultado de la excesiva influencia de grupos privados y sectoriales de interés -incluyendo el narcotráfico-, y de la incapacidad del mismo Estado para disolver tal influencia bajo el prisma del interés general.

* Ingeniero Universidad de los Andes, MBA The University of Georgia "
Político Universidad de los Andes, Instituto de Estudios Políticos de
París, Escuela Nacional de Administración París.

Algunos indicadores de esta situación permiten ilustrar la estructura real de la economía política del país, y explicar el conjunto de distorsiones internas y de vulnerabilidades externas que lo afectan de manera aguda y creciente. Tal vez los más reveladores de estos indicadores son los que describen la concentración de la propiedad económica y de los medios de producción.

La concentración económica en Colombia se puede caracterizar a través del control de mercado que ejerce un reducido grupo de conglomerados, sobre áreas cruciales de la actividad económica que van desde la intermediación financiera, los transportes y telecomunicaciones, hasta la producción, distribución y comercialización de componentes básicos de consumo.

El Estado colombiano opera como el instrumento protector de esta posición privilegiada, imponiendo políticas y medidas que configuran barreras de entrada para el libre y democrático desenvolvimiento de la actividad económica de la nación.

De esta manera, las entidades del Estado operan como instrumentos efectivos de intereses particulares. Ello ocurre principalmente en los sectores en que estos grupos requieren mayor protección del Estado, como son la defensa, la energía, las comunicaciones y los sectores reguladores de la actividad económica.

El control lo ejercen e incrementan estos grupos a través de prácticas que incluyen la corrupción, la coacción, la manipulación de los procesos políticos electorales y de los mecanismos de formación de la opinión pública nacional.

El objetivo de esta intrincada armazón es el de habilitar y mantener, de manera permanente, la transferencia del valor agregado creado por la nación a algunos conglomerados.

3. Los mecanismos de la transferencia de riqueza

El estudio comparativo de los ingresos del Gobierno Central con los de algunos conglomerados privados nacionales, ilustra la concentración de poder económico en manos de unos pocos grupos de interés privado. La Ilustración 1 resume esta información, pudiéndose observar allí cómo los ingresos declarados en 1997 por los tres primeros grupos privados, excedieron, en más de 18 por ciento, los ingresos totales del Gobierno Central.

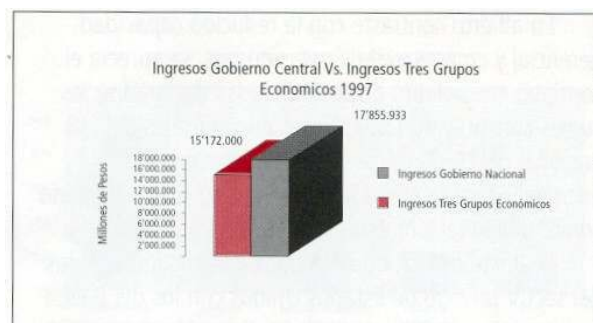


Ilustración 1 - Ingresos del Gobierno Central y de los tres primeros grupos económicos 1997

La Ilustración 2 desagrega por áreas de actividad la fuente de los ingresos de estos tres grupos. Más de tres cuartas partes de éstos provienen de la especulación financiera, de la venta de bebidas alcohólicas y de refrescos y de actividades comerciales. Sólo un 10 por ciento de sus ingresos se puede asociar a gestión empresarial en la economía real.

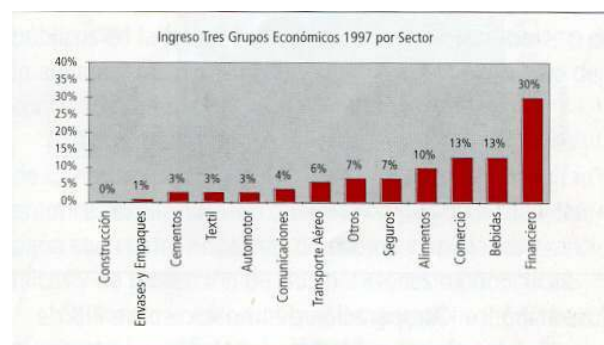


Ilustración 2 - Ingresos por Sector de tres primeros grupos económicos. Desagregación Porcentual para 1997

En ninguno de los casos estos conglomerados participan en actividades industriales que requieran agregación de valor de alta tecnología. Su participación en algunos sectores de avanzada, como el de las comunicaciones, se reduce al usufructo de concesiones cuasi monopolísticas, obtenidas del Estado como retribución a su financiación de campañas políticas.

Se observa que su participación en actividades industriales, que requieran altos niveles de preparación gerencial y de contenido técnico, es muy limitada, reduciéndose a algunas operaciones de ensamblaje o a la explotación de fábricas de tecnología primaria, como cementeras o fábricas de envases. La incapacidad de estos conglomerados para gerenciar actividades intensivas en capital y capacidad gerencial se evidencia en desastres industriales y ecológicos como el de Acerías Paz del Río.

En abierto contraste con la reducida capacidad gerencial y empresarial de estos grupos, se aprecia el continuo crecimiento de sus utilidades declaradas, las cuales constituyeron 2.9 puntos porcentuales del PIB nacional de 1997. Cerca de 16 % del crecimiento nacional ocurrido entre 1995 y 1997 ha sido apropiado como utilidades por estas tres entidades.

La Ilustración 3, que compara algunos indicadores del sector privado de Estados Unidos con los del país, pone en perspectiva esta enorme distorsión de nuestra economía. En proporción con el producto nacional de cada país, las utilidades de las tres primeras empresas colombianas fueron más de ocho veces mayores que las correspondientes a las compañías de los Estados Unidos y los ingresos de los grupos colombianos fueron tres veces mayores.

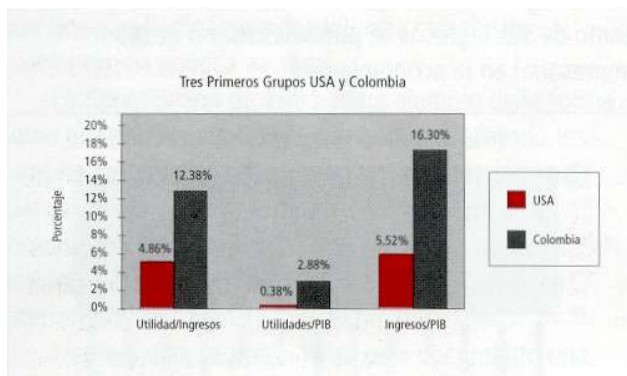


Ilustración 3 - Comparación de Impacto sobre PIB de tres primeras empresas de Estados Unidos con tres primeros grupos económicos colombianos en 1997

Más aún, para que en la economía norteamericana se pudiera igualar la proporción de Ingresos sobre PIB que en Colombia obtienen únicamente tres grupos económicos, sería necesario sumar los Ingresos de las 20 mayores corporaciones de ese país. Si se tiene en cuenta que la propiedad de las empresas norteamericanas se reparte entre millones de accionistas, el grado de concentración en Colombia resulta aun mas acentuado, pues la propiedad de los conglomerados nacionales reposa, en última instancia, en tres personas.

No es extraño entonces que la rentabilidad sobre los ingresos netos de los negocios en Colombia, de los grupos colombianos, sea muy superior a la de los negocios de los empresarios norteamericanos en su país. Aun con mercados, tecnologías y capacidades gerenciales inferiores, los tres grupos colombianos obtuvieron 260 % más de utilidad por cada peso de ventas, que la que los empresarios americanos obtuvieron de sus mercados en 1997.

Mirada bajo la óptica de la teoría económica, estas utilidades superiores se pueden explicar únicamente por el control de mercado que permite a estos grupos apropiarse de los excedentes sociales de la nación. En una economía competitiva, la utilidad que habrían podido realizar estos grupos no habría excedido de 870,000 millones de pesos en 1997, en contraposición a los más de 2,200,000 de millones de pesos que registraron en sus informes financieros del mismo período.

El costo en 1997 de esta irreversibilidad económica, protegida por el Estado, puede estimarse entonces, en mas de 1,400,000 de millones de pesos o 1.2 puntos porcentuales del PIB. En el período comprendido entre 1995 y 1997, el excedente social trasladado a los tres grupos de interés fue de 3,500,000 de millones de pesos, cifra igual al déficit consolidado del Gobierno Central en 1997.

Una tendencia similar de crecimiento a la que exhiben las utilidades de los grupos económicos, se observa en los gastos del Estado en Defensa y Seguridad. Esta correlación positiva entre utilidades privadas y gastos militares coincide con el rol subordinado del Estado al poder económico, capaz de externalizar a toda la sociedad el costo de su protección.

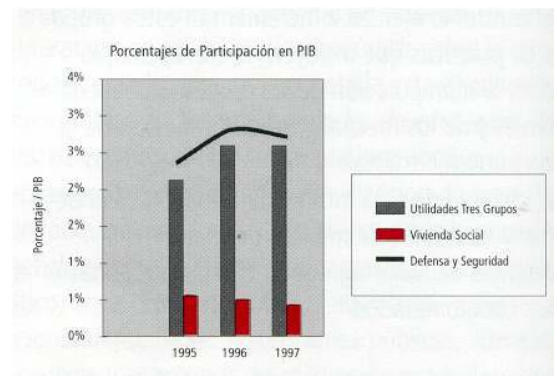


Ilustración 4 - Porcentajes de Participación en el PIB nacional de 1997 de las utilidades de primeros tres grupos, del Sector Defensa y de los gastos totales en Vivienda Social

La correlación negativa de estos indicadores con la inversión en vivienda social ejemplifica el abandono de. Estado de sus obligaciones fundamentales. De hecho, si este excedente que se ha señalado hubiera revertido al conjunto de la sociedad, el país habría podido multiplicar en mas de 300 por ciento el número anual de viviendas populares construidas o habría podido duplica la inversión realizada por el Gobierno en 1997 en Agua potable, Saneamiento Básico, Educación y Vivienda social

La comparación de las cifras de crecimiento del PIB y de desempleo con las de crecimiento de utilidades de los tres grupos privados ilustra el mecanismo de transferencia a unas pocas manos de la riqueza.

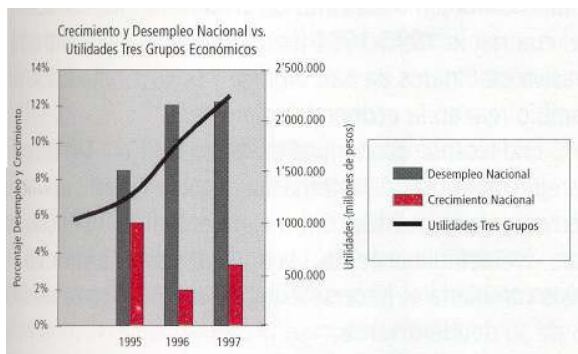


Ilustración 5 - Comportamiento de las Utilidades tres primeros grupos, Desempleo nacional y Crecimiento Real PIB en el período 1995-1997

En efecto, se observa en la Ilustración 5 que, mientras el desempleo aumentó en más de 39 % en el período 1995-1997, y que el crecimiento se redujo en más de 40 %, las utilidades privadas se incrementaron a una tasa superior al 30 %. Este comportamiento, contradictorio en una economía en recesión, confirma lo observado anteriormente: en Colombia, la acumulación de riqueza de los principales grupos de interés se realiza, en gran medida, a expensas del empobrecimiento nacional y no como resultado de una gestión empresarial que agregue valor a la economía nacional.

A la enorme magnitud de los excedentes sociales apropiados por los conglomerados mayores, debe agregarse lo apropiado por otros grupos menores, que han obtenido del Estado el control de algunos mercados no atendidos por los grandes conglomerados. El perfil de actividades de este segundo grupo es análogo al de los tres grandes grupos. Sus principales campos de actividad son la intermediación y especulación financiera y la producción de bebidas. La actividad industrial se reduce al sector de textiles, de algunos sectores agroindustriales y de transformación de productos químicos y petroquímicos. La ilustración No. 6 presenta en forma gráfica este patrón.

Aunque la información económica de este segundo grupo es fragmentaria e incompleta, su tamaño se puede estimar, de acuerdo al volumen de sus ingresos, entre un 40 % y un 75 % del grupo de los tres conglomerados mayores. El rendimiento de sus operaciones es similar al de los tres grupos económicos y sus utilidades, en adición a las utilidades normales, se puede tasar entre 0.5 y 0.9 puntos del PIB nacional.

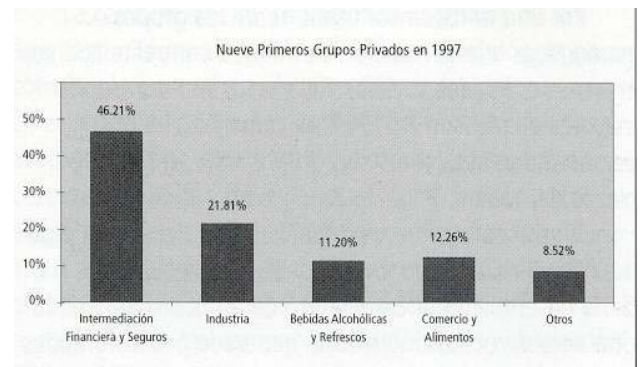


Ilustración 6 - Actividades de los primeros nueve grupos económicos privados de Colombia en 1997

Todos los grupos de interés económico obtienen protección del Estado a través de la imposición de aranceles de importación a productos competitivos, de contratos preferenciales de suministro de materias primas producidas por empresas del Estado o de la venta de servicios a éste, de la imposición a los consumidores de precios administrados, de transferencias de fondos públicos en la forma de estímulos a los exportadores o de la adjudicación de privilegios monopólicos por medio de concursos carentes de transparencia.

Las contribuciones a las campañas presidenciales y de Congreso por parte de los grupos de interés resultan entonces explicables. Lo que está en juego en cada campaña son cuatro años más de enormes utilidades económicas y de protección de sus posiciones monopólicas.

Se concluye entonces que los grupos económicos que controlan el Estado se apropian anualmente, en adición a las utilidades normales de mercado, de una cantidad equivalente al 1.8 a 2.1 puntos del PIB nacional o expresada ésta en pesos, entre 1, 800,000 de millones y 2,100,000 de millones de pesos. Estas cifras no incluyen el impacto de la eventual evasión de tributos impuestos.

Esta gigantesca pérdida social, que permitiría eliminar el déficit fiscal en un período menor a dos años, sólo puede ser sustraída de la sociedad con la protección y complicidad del Estado al servicio de los grupos económicos.

En realidad, la práctica de cubrir los faltantes fiscales con nuevos impuestos, no es otra cosa que la socialización de la enorme pérdida económica que estos grupos de interés le causan a toda la sociedad. La propuesta del nuevo gobierno de cubrir el déficit fiscal con nuevos impuestos que afectan exclusivamente a la población colombiana, sin tocar en absoluto a los grandes conglomerados, ilustra el papel del Estado frente a los grupos de interés.

Por otra parte, la contribución de los grupos económicos a la generación de empleo contrasta con sus enormes utilidades sociales. En efecto, los tres grupos mayores emplearon en 1997 únicamente 152,000 personas. Los siguientes seis grupos utilizaron 82,000 plazas de trabajo.

Si se acepta como valor del impacto del crecimiento del PIB sobre la reducción del desempleo el valor de 0.6 % de desempleo por cada punto de aumento del PIB, la cifra neta de ocupación laboral generada por los grandes grupos privados, apenas excedería a los 100,000 empleos, pues al menos 120,000 empleos se habrían dejado de crear debido a la pérdida social que se ha indicado.

El grado de concentración de la propiedad y el control de estos conglomerados son abrumadores. Seis de estos grupos son propiedad de otros tantos capitalistas y uno es propiedad de una sociedad cerrada de pocos accionistas. Puesto en la óptica de los agregados nacionales, más de 4 puntos porcentuales del PIB de Colombia son transferidos anualmente a nueve grupos de interés privados.

4. Los efectos de la concentración económica

No solamente los indicadores macroeconómicos de desempleo, de crecimiento y de control de la inflación revelan la incapacidad de la clase dirigente colombiana para dirigir la economía nacional. Los indicadores de violencia, de pobreza, de falta de oportunidades, de criminalidad, de corrupción, de inmoralidad y de atraso, constituyen las pruebas patentes de su fracaso histórico para conducir el Estado.

La concentración del poder económico en unas pocas manos es no sólo una de las características del subdesarrollo económico sino una de sus causas. Al analizar las características de las nuevas sociedades desarrolladas, Peter Drucker señala cómo los capitalistas individuales de estas economías se han convertido en apenas "... eventos noticiosos, cuyos ires y venires se señalan en las columnas de chismes... Económicamente, han llegado a ser irrelevantes".

La teoría económica formal, en su análisis de las imperfecciones de mercado, resalta las consecuencias negativas de las estructuras monopólicas y oligopólicas en términos de:

- Pérdida irrecuperable de la eficiencia económica
- Pérdida irrecuperable de excedentes económicos sociales

- Atraso y empobrecimiento nacional -

- Conducta predatoria que destruye la innovación

La estructura de concentración económica de Colombia, antes referida, agrava y exacerba estas irreversibilidades hasta el punto de destruir cualquier prospecto de crecimiento económico sostenible. Hoy resulta claro cómo las cifras de crecimiento económico del cuatrienio 1990-1994 fueron producto de la entrada masiva de dineros de narcotráfico y no el resultado de un cambio real en la economía colombiana.

El descenso económico del período 1994 -1998 corre parejo con la presión internacional sobre Colombia derivada de la política contra el narcotráfico. De hecho, el país vive actualmente bajo la amenaza de una enorme crisis cambiaría al hacerse exigible, en 1999, cerca de 30 % de su deuda externa.

Así, al ciclo de obtención de enormes utilidades de los grupos económicos sigue el del agotamiento de la economía, con su secuela de quiebras, de despidos, de pedidos de intervención del Estado para recoger los despojos, de presión para imponer regulaciones proteccionistas y para obtener subsidios. Los grupos privados, defensores de la privatización de las utilidades, se tornan en tales circunstancias en partidarios de la socialización de las pérdidas causadas por ellos.

Lo observado en el segundo semestre de 1998 no puede ser más elocuente: la economía ha entrado nuevamente en un profundo ciclo recesivo. La tasa de desempleo llega al 18 %. Las quiebras se multiplican. La estampida de los grupos privados para sacar dinero del país dispara el dólar.

Simultáneamente el Gobierno socializa la pérdida de más de 150,000 millones de pesos de Granahorrar y solicita un crédito externo de 800,000 millones para cubrir los dineros desaparecidos del sector financiero en crisis. Estas decisiones, habiendo resultado insuficientes, condujeron a decretar la emergencia económica de noviembre de 1998, dictada por los grupos financieros vinculados al actual gobierno. Por otra parte, la tasa de interés bancaria igual a la tasa legal de usura. En cualquier caso, se desconoce dónde reposan las gigantescas utilidades obtenidas en los años precedentes.

En tales circunstancias, el daño causado al subordinar el Estado a los grupos privados de interés, va mucho más allá de la pérdida de crecimiento económico o del drenaje de la riqueza nacional. En última instancia, es la perversión de la misión del Estado la que pone en peligro al ya gravemente afectado sistema democrático, a la sociedad entera, y hace cuestionable la viabilidad de nuestro país como nación.

Este Estado desfigurado asiste impasible al proceso de empobrecimiento y de desintegración de la sociedad

colombiana. Su incapacidad política se manifiesta, con toda crudeza, en las realidades que describen la situación actual:

- Aumento de las injusticias y desigualdades sociales.
- Violencia incontrolada de grupos privados de exterminio e interminables migraciones de desplazados.
- Deterioro del Estado como garante de los intereses nacionales.
- Corrupción de los mecanismos de decisión política.
- Destrucción del tejido social y de los mecanismos de solidaridad nacional.
- Crecimiento de la criminalidad y de las conductas antisociales de los individuos: tales como el secuestro, la extorsión, la defraudación, el robo, entre otras.
- Retroceso nacional en la arena de la competencia global.
- Vulneración de la soberanía nacional derivada de la pérdida de legitimidad y respetabilidad de su Estado.

El mayor daño social que la acción incontrolada de los grupos económicos le infligen al país es precisamente el costo de oportunidad social creado, al posponerse indefinidamente las reformas económicas y políticas que la sociedad colombiana requiere. El Estado, ante la contradicción antagónica entre los intereses de la sociedad colombiana y los intereses de los grupos de dominación económica, actúa al servicio de éstos últimos.

El historiador Paul Kennedy, al examinar la cuestión del liderazgo político de las naciones sobrevivientes en la próxima centuria, indica como

...es evidente que una sociedad que desee estar preparada para el siglo XXI pagará un precio por conseguir semejante transición, necesitará renovar las técnicas e infraestructuras nacionales, desafiar intereses creados, alterar muchos hábitos viejos y ... corregir las estructuras gubernamentales.

5. Crítica al economicismo de las soluciones de algunos grupos guerrilleros

La existencia de un Estado corrompido y manipulable por grupos de interés, explica en gran medida el crecimiento desmesurado del narcotráfico en Colombia, al haber encontrado estas organizaciones en el Estado canales de influencia y corrupción plenamente establecidos y funcionales. No es la supuesta localización estratégica del país para habilitar rutas e instalar cultivos ilícitos lo que lo ha convertido en el centro de operaciones del crimen internacional, sino la protección que, a cambio de dinero y sobornos, reciben estas bandas del mismo Estado para el desarrollo de sus múltiples actividades.

La relación de subordinación del Estado y de los agentes políticos a intereses de grupos privados, se ha constituido en modelo de actuación de los grupos emergentes de poder. Los carteles del narcotráfico se acoplaron a esta práctica ya elaborada y operante, para permear el aparato del Estado, así como los procesos electorales de carácter nacional y local en función de sus intereses, copiando los procedimientos utilizados por los grupos económicos. La presencia de dineros del narcotráfico en las campañas presidenciales liberales de 1982 y 1994 constituye uno de los ejemplos del ingreso de estos grupos al uso de estos canales de corrupción.

Dentro de este contexto, se producen ahora

planteamientos por parte de organizaciones guerrilleras que tienden a reproducir el esquema señalado de subordinación de la política a los grupos privados y al narcotráfico. En efecto, al constituirse como fuerza política de alguna relevancia, han expresado la necesidad de financiar sus actividades con recursos aportados por grupos privados, con la respuesta positiva de algunos voceros de estas entidades.

De esta manera, estas organizaciones condicionan su orientación y actuación a la voluntad que tengan los grupos privados de "meterse la mano al drill". Este tipo de condicionamiento repite el esquema de subordinación de la política a los intereses de los grupos. El mecanismo de corrupción predominante en Colombia es el mismo: pagar para obtener la protección de intereses privados. La práctica del secuestro es también una expresión de este fenómeno que se hace evidente por su envergadura y, principalmente, por su inclusión sistemática en las agendas de diálogo entre el gobierno y los grupos insurgentes.

Una posición de esta naturaleza, con su aparente fundamento económico-financiero, es en el fondo un aval al esquema tradicional de subordinación y una invitación a la manipulación de la política por parte de grupos privados de interés económico. Las contribuciones de estos grupos no tendrían otro objeto que impedir que el tema de los cambios de la estructura económica nacional se aborde. Cualquier reforma política, hecha en este contexto, no haría otra cosa que repetir el ejercicio falaz de 1991.

6. Los prerequisites de la reforma política

El dirigente opositor Alfonso Cano, en carta enviada en febrero de este año a uno de los propietarios y directores del periódico El Tiempo, indicaba que en "en Colombia se precisa barajar de nuevo el naípe y hacer una nueva repartición", y preguntaba: ¿La oligarquía está de acuerdo?.

La respuesta a esta pregunta es afirmativa. El establecimiento estará de acuerdo en barajar los naipes las veces que sea necesario, siempre y cuando las cartas del control económico no se repartan. En la Asamblea Constituyente de 1991, el establecimiento barajó todas las cartas, incluyendo las del narcotráfico, pero excluyó las del poder económico de los grupos de interés.

No debe sorprender pues que la reforma que el nuevo gobierno impulsa, omita deliberadamente la pregunta fundamental: ¿A quién debe pertenecer el Estado, a los grupos económicos privados o a la sociedad colombiana?

En realidad, cualquier reforma política real de la sociedad debe construirse sobre una profunda y radical modificación de la estructura económica colombiana. Esta reforma, sustentada en el principio de la libertad económica como requisito de la libertad política, deberá dirigirse hacia la eliminación de la capacidad corruptora del Estado por parte de agentes de intereses privados. En este contexto, debería incluir estos puntos:

Regulación de la actividad económica nacional por medio de:

- Implantación de legislación antimonopólica efectiva.
- Promulgación de Ley punitiva de las prácticas corruptas.
- Definición y sanción de las actividades económicas que lesionen el interés general.

Definición de los delitos económicos:

- Apropiación ilícita de la riqueza nacional.
- Apropiación de los excedentes requeridos para reducir la pobreza.

Definición de los delitos políticos:

- Protección desde el Estado de los delitos económicos.
- Favorecimiento de intereses económicos privados.
- Financiación de campañas políticas por parte de grupos privados de interés.

Proscripción de prácticas económicas restrictivas por parte de entidades de derecho privado que atenten o limiten la libertad económica de los individuos y de las comunidades.

Consagración del Principio de la ilegalidad Per Se de estas prácticas, que establece que la actividad misma es prueba de la violación de la ley.

Políticas Económicas y Fiscales:

- Expropiación de propiedad obtenida delictivamente.

Recaudo e incorporación a los presupuestos fiscales de las externalidades causadas por los grupos de interés.

- Reforma tributaria que impida la concentración del poder monopólico de mercado.

Debe resaltarse que las legislaciones que elevan a delito las conductas económicas predatorias están fundamentadas en razones de conveniencia social. Lo explica el Juez Learned Hand en su famosa sentencia condenatoria de Aluminum Company: "**La posesión de poder económico incontrastado mata la iniciativa, desestimula el ahorro y deprime la energía; la inmunidad a la competencia es un narcótico...**". El Magistrado Black en el juicio Northern Pacific Ry. Co. V. United States sentencia: "[la Ley antitrust]... provee el entorno conducente a la preservación de nuestras instituciones democráticas políticas y económicas."

De esta manera, si los cambios mencionados se efectúan, las necesarias reformas del sistema judicial, de la fuerza pública, de los procesos electorales, de la composición y estructura de las ramas del poder público, del sistema educacional, del ordenamiento territorial, de la estructura de la propiedad rural y urbana, de los sistemas financieros e industriales, de las relaciones de Colombia con el mundo se podrán también realizar.

Bibliografía

- Semana, Edición 835, Bogotá, Mayo 4-11, 1998.
La Nota Económica, No. 22, Bogotá, Sept. 14-28, 1998.
"Indicadores de Coyuntura Económica", Resultados Económicos de 1996-1997, Departamento Nacional De Planeación, <http://dnp.gov.co>.
US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Account Data, <http://www.census.gov/>.
Fortune Magazine, Fortune 500, <http://www.fortune/fortune500/500list.html>.
El Tiempo, pág. 3, Sept. 7, 1998, Nueva Agenda Económica, Exposición; Ministro Hacienda.
El Tiempo, Feb. 22, 1998, Encuentros en El Exterior Son Etapas Superadas.
Molina, Luis Fernando, Empresarios Colombianos del Siglo XIX, Banco de la República/El Ancora Editores, Bogotá, 1998.
Drucker F., Peter. The New Realities In Government and Politics-In Economics and Business/In Society and World View, Harper / Row, Publishers, New York, 1989.
Kennedy, Paul, Hacia el Siglo XXI, Plaza / Janes Editores, S.A., Barcelona, 1993.
Reed, O. Lee, The Legal Environment of Business, McGraw-Hill, Inc., New York, 1981.